



Chile, la sombra de la dictadura

ANDREA INSUNZA Y JAVIER ORTEGA

En este texto se analizan los efectos de la dictadura chilena en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Chile, distinguiendo tres etapas. La dictadura, en la que el régimen de Pinochet clausuró medios, aplicó una política de censura previa y reprimió a periodistas al punto de asesinarlos. La transición a la democracia, con un periodismo que se caracterizó por su prudencia, cierta herencia autoritaria y un excesivo respeto hacia las autoridades. Por último, la etapa posterior a la detención de Pinochet en Londres (1998): desde entonces el periodismo chileno se vitalizó, fiscalizando y pidiendo rendición de cuentas a las autoridades, algo que aún falta consolidar frente a poderosos actores extrainstitucionales.

Palabras clave: Dictadura, libertad de expresión, periodismo, poder, Chile.

Una de las primeras víctimas del periodismo chileno en la dictadura cayó junto a los defensores de Salvador Allende en La Moneda, casi al mismo tiempo en el que se extinguía la vieja democracia. El periodista Sergio Contreras, jefe de prensa de la Intendencia Metropolitana y militante socialista, fue apresado por soldados del Ejército, luego de la rendición del palacio presidencial. Sus captores lo llevaron al Regimiento Tacna. Hasta hoy sigue desaparecido.

La dictadura militar chilena dejó un total de 23 periodistas chilenos muertos o desaparecidos. Cuatro periodistas de otras nacionalidades también fueron asesinados. Uno de ellos fue el estadounidense Charles Horman, torturado y fusilado en el Estadio Nacional, cuyo caso inspiró la película *Missing* (1982), del director francogriego Costa Gavras.

ANDREA INSUNZA es licenciada en Comunicación Social (Universidad de Chile). Master of Arts in Journalism (Politics), Columbia University. Ha trabajado en los diarios *La Época* y *La Tercera*. Desde marzo de 2004 es investigadora del Centro de Investigación y Publicaciones de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, del que es directora.

JAVIER ORTEGA es licenciado en Comunicación Social (Universidad de Chile). Magister en Opinión Pública UDP. Ha trabajado en los diarios *El Mercurio*, *La Época*, *La Hora*, *El Metropolitano* y *La Tercera*. Desde 2004 es investigador del Centro de Investigación y Publicaciones de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP. Ambos son coautores de *Bachelet. La historia no oficial* (2005), *Legionarios de Cristo en Chile: Dios, dinero y poder* (2008) y *Los archivos del cardenal* (2011, 2014).

Infoamérica

Revista Iberoamericana de Comunicación



No obstante, para el periodismo, el legado de la dictadura no fue solo de muerte, tortura, abusos y exilio. Su marca dejó profundas huellas en el ejercicio de la profesión, que se extendieron hasta bien entrada la transición democrática.

Apenas se hizo con el poder, el nuevo régimen suspendió violentamente la libertad de prensa. Además, puso en el punto de mira la integridad física de los trabajadores de la prensa, especialmente de quienes tenían militancia política. Una constante que, en mayor o menor intensidad, se mantuvo hasta el fin de la dictadura.

Según el informe de la Comisión Verdad y Periodismo (1992) —del Colegio de Periodistas de Chile—, luego del golpe fue clausurada más de una quinceña de medios escritos, junto a unas 40 radioemisoras en todo el país, bajo el criterio de que eran «adictos a la UP». Los medios sobrevivientes quedaron bajo censura previa hasta finales de 1973. A partir de 1974 se acabó la censura previa, aunque continuaron aplicándose diversas restricciones legales y *de facto*. Hacia finales de 1975, catorce periodistas estaban detenidos, procesados o condenados, mientras que en el exilio o autoexilio había alrededor de 300.

El resultado fue un control absoluto de los medios de comunicación, lo que facilitó a la dictadura ejercer el poder y violar sistemáticamente los derechos humanos sin ningún contrapeso, salvo el de las iglesias, particularmente la Católica. En general, los medios que en este período sobrevivieron apoyaban al régimen y publicaban sus versiones sin corroborarlas. Un ejemplo fue la negación sistemática de la existencia de los detenidos desaparecidos hasta 1978, cuando los hallazgos de osamentas en Lonquén derrumbaron esta negativa. Otro ejemplo es que, incluso en los ochenta, algunos importantes medios escritos y de televisión siguieron atribuyendo a «enfrentamientos» el asesinato a sangre fría de opositores detenidos e indefensos.

Según el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, también conocido como Informe Rettig, publicado en 1991, la desinformación de la opinión pública en estas materias «contribuyó sin duda a la mantención de las violaciones a los derechos humanos en el país».

El cerco desinformativo solo aflojó en algo a partir de 1977, con el surgimiento de algunos medios opositores de circulación restringida que se mantuvieron a duras penas, mediante subterfugios o recurriendo a los tribunales. Pese a esta tenue apertura, continuaron medidas como clausuras temporales y censura previa, cárcel para periodistas y directores de medios, además de agresiones en la vía pública contra reporteros. Aunque en los ochenta surgieron diarios y revistas opositores, que se sumaron a algunas radios, en general los medios masivos mantuvieron una postura de apoyo al régimen (y, con mucho, se restaron de criticarlo), fuera por convicción o por autocensura para seguir sobreviviendo.

La indefensión periodística se hizo dramáticamente patente el 8 de septiembre de 1986, con el asesinato del periodista José [Pepe] Carrasco, a manos de la CNI. El profesional, editor internacional de la revista *Análisis* y militante

del MIR, fue acribillado luego de ser apresado de madrugada en su hogar, en venganza por el atentado que horas antes había sufrido el general Augusto Pinochet, a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). «La pequeña arrogancia que teníamos de creer que ser periodista te daba inmunidad para lo más brutal de la represión, dos años antes del plebiscito, quedó destruida de cuajo», recuerda el periodista Fernando Paulsen, amigo y compañero de labores de Carrasco.

Pasarían años para que los autores del crimen recibieran su condena, en los primeros años de la naciente democracia. Cuando en marzo de 1990 la dictadura dio paso a la transición democrática, Chile mantuvo dispositivos legales diseñados por el régimen para acallar la libertad de prensa, como la Ley de Seguridad del Estado y un Código de Justicia Militar con facultades amplísimas, lo que hacía difícil que la prensa cumpliera a cabalidad su labor de fiscalizar al poder. Además, Pinochet mantuvo parte importante de su influencia: dejó la Presidencia, pero no la Comandancia en jefe del Ejército. Desde ese cargo siguió como actor político y protagonizó las más graves turbulencias de la naciente democracia, cuando sintió que él o los suyos eran cuestionados.

Para las nuevas autoridades democráticas, dado el escaso margen del que disponían, contar con una prensa demasiado inquisidora podía llegar a ser incómodo, hasta peligroso. El 24 de agosto de 1990, a poco más de cinco meses de asumir la Presidencia, Patricio Aylwin pronunció un discurso en la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), donde solicitó a propietarios y directores de medios que «extremen su cuidado, a fin de que, al cumplir su tarea de informar, sean vehículos de unidad y no de disensión, de verdad, y no de error».

En un escenario donde primaban los consensos y donde la ruptura era mal vista, la gran mayoría de los medios aceptaron estos llamados a la cautela, en el entendido de que había que cuidar la democracia que tanto había costado. Salirse de esta línea podía tener riesgos. Baste recordar que el titular del diario *La Nación* del 28 de mayo de 1993, que rezaba «Reabren caso cheques del hijo de Pinochet», provocó el *boinazo*, uno de los dos movimientos militares más críticos de la época.

Con los años, esta prudencia inicial se anquilosó y dio paso a un tratamiento en excesivo cuidadoso a la hora de escrutar a los poderes públicos o privados. Fue como si se hubiese heredado un cierto temor a la autoridad. Hasta que, en octubre de 1998, esa cultura se vino abajo cuando Pinochet, quien en marzo había dejado el Ejército y asumido como senador vitalicio, fue detenido en Londres por una causa de violaciones a los derechos humanos abierta en España. El arresto no solo simbolizó la caída de los intocables, sino que también puso de manifiesto que buena parte de la prensa chilena debía ponerse a tono con los hechos. Era demasiado fuerte el contraste con los medios extranjeros, que al cubrir el arresto en Londres hablaban del *ex dictador* en vez del *ex gobernante*, y de *dictadura* en vez de *gobierno militar*.

A la detención de Pinochet se sumó ese año el fin de la *pax romana* entre los dos principales diarios de la plaza. *El Mercurio* y *La Tercera* iniciaron una



Infoamérica

Revista Iberoamericana de Comunicación

Atentados contra periodistas en América Latina | 10 • 2016



enconada competencia por ganar influencia y nuevos lectores. El *golpe noticioso* adquirió importancia. Las fuentes en *off* y las disputas políticas tras las versiones oficiales, también. Poco a poco los periodistas dejaron de ser voceros del poder y se convirtieron en sus fiscalizadores.

Producto de una seguidilla de escándalos cubiertos por la prensa, en 2000 la jueza Gloria Olivares sería removida de la Corte de Apelaciones; un año después, y por primera vez en su historia, la Corte Suprema expulsaría a uno de sus miembros, el magistrado Luis Correa Bulo, en una acusación de «notable abandono de deberes», en la que la prensa nuevamente tuvo un rol; en 2002, la revista *Qué Pasa* destaparía el Caso Coimas por el que los diputados DC Cristián Jiménez y Luis Pareto y el PPD Víctor Manuel Rebolledo serían desaforados y, cinco años después, condenados. En enero de 2003 la Corte Suprema nombraría a la jueza Gloria Ana Chevesich para investigar el Caso MOP-Gate, que puso de cabeza al gobierno de Ricardo Lagos.

La idea, entonces, de un periodismo más fiscalizador, comenzó a imponerse en la industria. Si en dictadura la tensión entre la investigación periodística y el poder estaba dada por la postura ideológica de unos medios opositores que bregaban por el fin del autoritarismo versus una autoridad que buscaba limitarlos, a fines de los noventa se produjo un reordenamiento en que periodistas y autoridades quedaron, como siempre debió haber sido, en veredas opuestas.

Entrada la última década de este siglo, con una democracia ya plenamente consolidada, el periodismo chileno siguió profundizando este perfil inquisidor, acicateado por una nueva ciudadanía que mira cada vez con mayor desconfianza a las elites políticas, religiosas y empresariales. En los últimos años, las encuestas de opinión pública han arrojado un progresivo deterioro en la credibilidad de instituciones como el Congreso, los partidos políticos, la Iglesia Católica y el empresariado, debido a escándalos sobre abusos e irregularidades que han sido profusamente cubiertos por los medios.

La prensa chilena también ha sufrido una caída en la confianza ciudadana, a pesar de su cobertura de casos como los abusos sexuales de eclesiásticos, la colusión de grandes empresas y, ahora, los escándalos políticos como Penta, Caval y SQM. Las razones de esta merma no son del todo claras y las hipótesis para explicarla son variadas: el mercado tiene pocos actores, es aún mayor la audacia para fiscalizar al sector público antes que al mundo privado, y es probable que a parte de los medios chilenos les siga pesando un pasado de obsecuencia.

Con todo, luego de un régimen dictatorial y de una *sui generis* transición política, en los que demasiadas veces algunos medios guardaron silencio, el periodismo chileno ha desarrollado una faceta fiscalizadora. Lo que resta ahora es nada menos que consolidar ese perfil en su labor del día a día, noticia por noticia, en una tarea donde no existen los atajos y sí muchos riesgos. Es decir, renovar el pacto en que el periodismo escruta a los poderes públicos y privados e informa a la ciudadanía, en pos de mejorar la democracia. La recompensa: conquistar y mantener la confianza de las audiencias.